

LUIS MESA DELMONTE (J958). Lic. en Relaciones Internacionales. Investigador del Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente (CEAMO).

El apoyo internacional norteamericano a los regímenes autoritarios

El apoyo de los Estados Unidos a los regímenes dictatoriales se manifiesta especialmente en el suministro de tecnología represiva, policial y de contrainsurgencia, y constituye una de las características más sobresalientes de la política exterior norteamericana

El estudio que nos presentan Klare y Arnson¹ posee un gran valor documental e informativo. Se aborda con nitidez el comercio de equipamiento para la represión — como subconjunto del comercio bélico global— entre los Estados Unidos y diversos regímenes a nivel internacional, los mecanismos vías e instituciones encargados del desarrollo de esta actividad, las áreas hacia las que se dirige y la cuantía que alcanzan.

En la introducción del trabajo se expresan sintéticamente diversas ideas que los autores se proponen demostrar y desarrollar con mayor exactitud en capítulos posteriores. Entre estos planteamientos se destaca centralmente que “los Estados Unidos están y han estado profundamente vinculados con la proliferación de la represión en el exterior, mediante su apoyo militar y económico a regímenes autoritarios y mediante las ventas de tecnología y técnicas represivas a agencias gubernamentales responsabilizadas directamente con el terrorismo político y la eliminación de la disidencia”;² lo que los autores evalúan como característica “consistente e intencional” de la política exterior norteamericana.

Se reconoce que en el ámbito oficial los programas de suministros de armamentos aparecen diseñados para fortalecer la capacidad defensiva de los países; pero un examen de su comercio sugiere que una parte de los equipos está destinada a la utilización interna, lo que junto con los numerosos y variados programas de entrenamiento, fortalece considerablemente a los cuerpos policiales y a los grupos paramilitares en diversos países para desarrollar acciones contrainsurgentes, de antihuelgas y de seguridad.

En el acápite introductorio —“Derechos humanos y el comercio de la represión”— se hace referencia a la forma en que ha evolucionado este comercio de equipamiento represivo. Se indica que en los años en que se desarrolla el fenómeno de la “guerra fría”, y sobre los fundamentos de la política de “contención”, los Estados Unidos buscaban “reforzar las capacidades defensivas de gobiernos amigos” en regiones periféricas a la URSS y a China, así como en áreas del llamado Tercer Mundo que se consideraban “maduras para la subversión comunista”.

¹ Michael T. Klare y Cynthia Arnson: *Supplying Repression: U.S. Support for Authoritarian Regimes Abroad*, IPS, Washington, 1981.

² *Ibid*, p. 26.

Según Klare y Arnson, a partir del triunfo de la Revolución Cubana Washington, comienza a prestar más atención a las guerras de liberación nacional y a conceder más énfasis a la contrainsurgencia, línea que se refuerza con las administraciones de Kennedy, Johnson y Nixon. Los autores afirman que esta política ha sido profundamente implantada en la proyección externa de las élites norteamericanas y que consiste en el abierto apoyo a los regímenes anticomunistas, con independencia de las características políticas internas y del problema de los derechos humanos. La misma comenzó a cuestionarse a partir del fracaso norteamericano en Vietnam.

Como punto máximo de cuestionamiento se señalan los primeros años de la administración Carter, cuando se decidió efectuar recortes y en algunos casos suspensión de la ayuda y suministros a países que violaban los derechos humanos, pero sin llegar a poner en entredicho el principio rector del suministro bélico norteamericano al exterior —es decir, el concepto de la “seguridad nacional”—, por lo que durante la administración Carter se mantuvieron los abastecimientos bélicos a regímenes tan deplorables como los sancionados. Incluso el balance general en los cuatro años de administración reflejó un aumento de ese sostén.

En el segundo capítulo, “Armar a la policía”, se refleja que a comienzos de la década del 60 los políticos norteamericanos consideraban a los cuerpos policiales como la primera línea de “defensa contra la insurgencia y que fue así como se decidió fortalecer las fuerzas represivas de regímenes pronorteamericanos mediante el suministro de equipamiento policial, el entrenamiento avanzado y el envío de asesores.

Para concretar estos objetivos se creó la Oficina de Seguridad Pública (OPS) y se reforzó considerablemente el Programa de Seguridad Pública (PSP). El estudio brinda algunos ejemplos que ilustran la manera en que actuaron estos organismos hasta su disolución a principios de la década del 70 y cómo las funciones de ambos continuaron a cargo del Programa Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado (UNC) y de la Administración para la Vigilancia de las Drogas del Departamento de Justicia (DEA).

En “La conexión del Pentágono”, tercera parte del estudio, se ilustra cómo los Estados Unidos han suministrado equipos militares a “gobiernos amigos” a través del Programa de Asistencia Militar (MAP), el entrenamiento mediante el Programa Internacional de Entrenamiento y Educación Militar; las ventas de armas a crédito bajo el programa de Ventas Militares al Exterior (FMS), los envíos de otras armas sobrantes mediante Artículos de Defensa Excedentes (EDA), y suministros de préstamos y subsidios a “gobiernos amenazados” mediante el Fondo de Apoyo Económico (ESF).

Klare y Arnson ejemplifican la aplicación de estos programas en casos concretos y demuestran que contribuyen a elevar la capacidad represiva de los regímenes receptores. Evidencian además que el Pentágono, a pesar de estar limitado legalmente para proveer entrenamiento a cuerpos policiales extranjeros, logra vincularse a estas actividades utilizando vías indirectas.

En “Los mercaderes de la represión” —el cuarto capítulo del libro— se explica que los compradores extranjeros pueden adquirir armamento norteamericano a través del programa de ventas militares al exterior y que comprende equipamiento bélico de envergadura y mediante el programa de Ventas Comerciales (CS), negociado directamente por firmas fabricantes de armamentos ligeros.

Se describen asimismo algunos de estos equipos ligeros —armas de fuego, carros armados, equipos antimotines, equipos de observación— y se relacionan las principales firmas fabricantes y comercializadoras: Smith and Wesson Co., Federal Laboratories Inc., Colt Firearms, Remington Arms y otras.

“El comercio del área gris en la represión”, capítulo quinto, destaca que además del FMS y del CS existe otro canal para los suministros militares represivos: los programas de comercio convencional supervisados por el Departamento de Comercio. Estos amparan una serie de artículos que aunque pueden ser y son ampliamente utilizados para propósitos militares, no se consideran “equipos de guerra” y no están sujetos a regulaciones estrictas, pues se enmarcan en una clasificación (área gris) entre lo puramente militar y lo puramente civil. Ejemplo de ello son aviones de transporte, radares, helicópteros, computadoras, equipos de detección y control criminal, etcétera.

También se precisa que los canales del Departamento de Comercio se utilizan para violar los embargos de ventas hacia algunos regímenes específicos como los casos chileno y sudafricano, ya que mientras las restricciones de las leyes norteamericanas no permiten las ventas de armamentos regulares a esos países no prohíben explícitamente las ventas de equipos de uso dual o civil-militar.

En las conclusiones del libro se afirma que los Estados Unidos, su gobierno y su industria de armamentos han estado profundamente vinculados al suministro de tecnología represiva a regímenes autoritarios, y que la administración Carter no fue capaz de reevaluar la ideología de la seguridad nacional que ha primado en la política exterior norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. Los suministros se mantuvieron e incluso aumentaron a medida en que la administración Carter abandonó en gran parte sus compromisos con los “derechos humanos”.

También se deducen posibles medidas a tomar durante la administración Reagan, “comprometida con restaurar la superioridad norteamericana”; entre éstas el aumento de los gastos militares y de las ventas de armamentos, el incremento del apoyo a regímenes pronorteamericanos, la realización de acciones encubiertas, la reducción de controles sobre los canales de exportación de armamentos no gubernamentales, el aumento de la privatización del comercio de la represión, la desvalorización del tema de los derechos humanos y el fortalecimiento de las prerrogativas de la seguridad nacional.

Los autores llegan a la conclusión de que el suministro de tecnología represiva y la promoción de los derechos humanos resultan incompatibles, y recomiendan diversas medidas encaminadas a detener los suministros de materiales represivos y a eliminar los programas de asesoramiento a cuerpos policiales, de seguridad o paramilitares de

dictaduras extranjeras. Además, subrayan la necesidad de desarrollar una política de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

Arnson y Klare nos brindan diversos apéndices encaminados a aportar nuevos datos sobre el comercio internacional de material represivo. Resultan de gran utilidad los cuadros que se anexan por su gran contenido informativo, en los que se refleja la ayuda militar norteamericana al exterior brindada a diversos países (1950-1979), las ventas de armamentos estadounidenses a diversos gobiernos (1955-1979) y las ventas de equipos policiales a países del llamado Tercer Mundo (1976-1979). A lo largo del estudio aparecen además numerosas tablas de gran valor documental sobre diversos aspectos relacionados con esta temática.